

San Juan de Pasto,
Enero 30 de 2023.

Radicado 2023ER0013052
30-01-2023

Doctora:
LILIANA DEL PILAR CABRERA ESTUPIÑAN
Profesional Secretaría Común (e)
Gerencia Departamental Colegiada de Nariño
responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co
Yolanda.jurado@contraloria.gov.co

Referencia: Versión Libre y espontánea
Proceso de Responsabilidad Fiscal No. **PRF-80522-2021-39273. Auto No. 680**

RHONNY HALSTONG MIRANDA MARTÍNEZ, mayor de edad y vecino de Pasto {N}, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de presunto vinculado al asunto de la referencia, teniendo en cuenta la citación calendada el 27 de diciembre de 2022, mediante Oficio 80523 2022EE0233767, respetuosamente y por medio del presente escrito, me permito presentar versión libre y espontánea, dando aplicación a las normas de raigambre constitucional (arts. 29 y 33), así como también legal (arts. 42 y 66 de la Ley 610 del 2000), y al Concepto CGR-OJ-01155-2017 contenido en el oficio número 2017EE0088380 del 24 de julio de 2017 proveniente de la Contraloría General de la República; disposiciones todas que me permiten rendirla de esta forma y libre de todo apremio, en estos términos:

Motiva la Contraloría en auto **1188 de octubre 21 de 2022**, que encuentra procedente vincularme como presunto responsable fiscal, porque en su concepto tuve incidencia en el supuesto daño ocasionado al erario público, con ocasión de mi función como director del Departamento Administrativo de Contratación Pública del Municipio de Pasto, daño que supuestamente se generó en la ejecución del **convenio No. 202022754** celebrado entre la Alcaldía de Pasto y la **Junta de Acción Comunal del barrio el Tejar**.

Para desvirtuar esa presunta responsabilidad, es menester decantar cuáles eran las precisas funciones que como director del Departamento Administrativo de Contratación Pública - DACP del Municipio de Pasto, me correspondían, mismas que de manera clara y específica se consignan en el Decreto 0433 del 23 de octubre de 2017, el cual establece:

"II. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

- 1. Establecer las metodologías para llevar a cabo los procesos de contratación estatal en todas las etapas conforme a la ley 80 de 1993 y demás normas que la desarrollen, modifiquen o cambien.*
- 2. Organizar el Comité de Contratación del Municipio.*
- 3. Asesorar a todas las dependencias de los sectores centrales y descentralizados en los procesos de contratación y celebración de contratos en todas las etapas que se encuentran establecida en la Ley.*

4. *Coordinar con otras dependencias la elaboración del pliego de condiciones y términos de referencia, cuando a ellos haya lugar dentro de los procesos de licitación o concurso público de méritos.*
5. *Fomentar acciones tendientes a la agilización y aceleración en los procesos de contratación y celebración de contratos.*
6. *Publicar los procesos contractuales y los contratos.*
7. *Realizar todo el proceso legal de la contratación.*
8. *Velar por el mejoramiento continuo de los Sistemas de Control Interno y Gestión de la Calidad.*
9. *Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño y la naturaleza del empleo.”*

La claridad de las citadas funciones impide desatender su tenor literal favoreciendo interpretaciones incorrectas. De su simple lectura se extraen dos verdades incontrovertibles: (i) La función a mi encomendada es realizar la gestión contractual y asesorar a las dependencias cuando estas lo requieran y, (ii) los hechos que generan el presunto daño al erario público son netamente de carácter técnico, correspondientes a la Secretaría que requiera la contratación en este caso de la **Secretaría de Infraestructura y Valorización**, es esa dependencia quien estructuró los estudios previos, que lógicamente deben incluir autorizaciones, aprobaciones permisos, presupuesto, análisis de precios unitarios - APU, estudio de mercado, perfil de los futuros contratistas, diseños, análisis del sector, matriz de riesgos etc., que sirvan de soporte para la contratación.

Por otro lado, quien por su formación académica y desde su competencia eran los responsables de verificar costos unitarios de los materiales, calcular las cantidades, en general proyectar el presupuesto, controlar la ejecución, desarrollo y cumplimiento de la ejecución contractual, no puede ser otra dependencia que la Secretaría de Infraestructura y Valorización; no cabe la menor duda que deba ser así, toda vez que las funciones del cargo desempeñado por el suscrito y mi formación profesional como abogado no genera de por sí la idoneidad en esas disciplinas técnicas propias de la ingeniería civil. Pero si es necesario resaltar que, no cabe duda, que, en desarrollo de la gestión precontractual del convenio, en la función encomendada como director del DACP, y de acuerdo a la competencia tanto legal como reglamentaria se cumplió a cabalidad por el suscrito.

Por tanto, en mi actuar como director del Departamento Administrativo de Contratación – DACP se vio enmarcado bajo convicción invencible de que el contratista dará cumplimiento al objeto del convenio en coherencia con el presupuesto, los diseños, análisis del sector y todas las condiciones técnicas que la Secretaría de infraestructura y sus profesionales plasmaron en el estudio previo y que posteriormente supervisarán en la ejecución del contrato.

En ese orden, estoy siendo investigado y se me ha mantenido sometido a un proceso fiscal, por unos deberes que según el manual de funciones Decreto 0433 del 23 de octubre de 2017, y el propio convenio demuestran que no me eran propios, ni fueron de mi órbita funcional; El art. 3 de la ley 610 de 2000 distingue como actividades de gestión fiscal las jurídicas y las tecnológicas; en mi caso, tal y como se evidencia en las pruebas del proceso, cumplí con la gestión fiscal que de acuerdo al convenio y a mis competencias me correspondían; sin embargo reitero, me era humanamente

imposible desplegar una gestión fiscal técnica sobre las una obra de infraestructura objeto del convenio por tres fortísimas razones: **i)** por cuanto adolezco de esos conocimientos técnicos por mi perfil profesional; **ii)** porque la función de análisis y proyección presupuestal, cotizaciones de costos o precios, análisis de APU, estudio del sector, y en general control y vigilancia de la correcta ejecución del convenio correspondía a LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA; y **iii)** porque para la fecha de suscripción del acta de inicio de la obra, o sea el 1 de diciembre del año 2020, el suscrito ya no se encontraba fungiendo como Director del DACP, o sea ya no era funcionario de la Alcaldía de Pasto. Como base lo anterior, se desacredita el argumento del punto **“7.2. LOS PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES”** del ente de control mediante el cual establece:

*“Como facultado por el Decreto 0348 de 11 de septiembre de 2020 para comprometer los recursos estatales del municipio de Pasto y para legalizar los contratos por él celebrados y de acuerdo a manual de funciones y competencias laborales, según el cual, a Director del Departamento Administrativo de Contratación Pública le corresponde “Establecer las metodologías para llevar a cabo los procesos contratación estatal en todas las etapas conforme a la Ley 80 de 1993 y demás normas que la desarrollen, modifiquen o cambien”, al señor Miranda le correspondía velar **porque los recursos estatales se ejecutaran íntegramente en el Polideportivo del Barrio Atahualpa** conforme a los postulados del artículo 3 de la Ley 80 de 1993.”*

Como puede evidenciarse de la simple lectura de la presunción, era física y funcionalmente imposible para el suscrito velar por la ejecución del mencionado convenio toda vez que ya no me encontraban vinculado como director del DACP; por lo tanto, encontrar alguna irregularidad jurídica en la ejecución del convenio solamente correspondería a un funcionario de la administración municipal con competencia para tal fin. Y si, hipotéticamente me hubiera encontrado vinculado como director del DACP, la interpretación es totalmente errada por cuanto, según el texto *“llevar a cabo los procesos de contratación estatal en todas las etapas conforme a la ley 80 de 1993 y demás normas que la desarrollen, modifiquen o cambien.”*, no implica que un profesional del derecho o funcionario del DACP (a menos que sea ingeniero civil), deba analizar APU, características, medidas, o ítems ejecutados en una obra; como son los que toma como base la Contraloría en el análisis concreto del caso, que muy técnicamente cita por medio del auto de apertura de proceso, y analiza: replanteo general, pañete exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm, reflectores iluminación cancha de futbol tipo led, cerramiento de protección e impacto elevado, lo anterior debidamente tabulado y analizado **técnicamente**.

Carece de toda lógica jurídica que el ente de control realice una presunta imputación de responsabilidad fiscal a un profesional del derecho basándose presuntas incorrecciones y datos técnicos, y no exista al menos un indicio de acción u omisión jurídica o funcional. Todo el análisis del caso concreto realizado por el ente de control fiscal toma como base, argumentos, y evidencias netamente técnicos que en apoyo de mi argumento son aportados mediante un informe pericial realizado por el profesional expedito en la materia el ingeniero civil de apoyo Jonathan David Ahumada Caicedo– Profesional Universitario Grupo de vigilancia fiscal, profesional que lógicamente puede establecer un presunto daño presentado en la ejecución de una obra de infraestructura, pero que en nada aporta a establecer una la acción u omisión jurídica que afecte el erario.

En ese orden y de conformidad con la cláusula general de competencias y responsabilidades (arts. 121, 122, 123 C.N.) aplicable por antonomasia al proceso fiscal, los servidores públicos tenemos nuestras competencias definidas y no podemos ejercer funciones distintas, ni en forma diversa a como se nos atribuye en la constitución y la ley. En desarrollo de dichos cánones supra legales el artículo 4 de la ley 610 de 2000 exige que, para establecer la responsabilidad fiscal, el ente de control debe acatar los principios rectores de la función administrativa y de la gestión fiscal; presupuesto que, para el presente caso, simplemente se ha ignorado.

Según profusa jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado, *“la investigación fiscal tiene por objeto determinar si un servidor público en el ejercicio de la gestión fiscal que le es propia, ha causado por acción u omisión en forma dolosa o gravemente culposa un daño al patrimonio público; de donde se concluye, que el fundamento de toda responsabilidad fiscal radica en el incumplimiento de deberes propios del cargo, lo que como se demostró, no es de ocurrencia en el subjudice. El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta la determinación de la antijuridicidad de las conductas reprochadas por la ley fiscal; el título de imputación fiscal que ha construido la Corte se fundamenta justamente en la transgresión u omisión de tal deber.”*

En ese orden de ideas, conforme a los hechos y las pruebas obrantes, en el presente caso se desconfiguran por completo los elementos de adecuación típica exigidos en la Ley 610 de 2000 para estructurar responsabilidad fiscal, esto es; una conducta dolosa o culposa, un daño patrimonial al Estado y un nexo causal; requisitos que como bien se sabe son confluentes necesarios, es decir, que faltando tan solo uno de ellos no es jurídicamente posible ni siquiera indiciariamente atribuir responsabilidad fiscal. ¡Actuar a contrario significaría violentar el debido proceso y los principios orientadores de la acción fiscal (art. 2 ídem).

En el derecho colombiano, la regla general consiste en que los deberes a cargo de los funcionarios que ejercen supervisión de un contrato, como consecuencia del principio constitucional contenido en el artículo 6, deben ser determinados y determinables según sus competencias para cada organismo administrativo, obligación que para el caso del convenio solidario 20202751, se encontraba en cabeza de la Secretaria de Infraestructura según sus competencias, funciones, y perfil profesional, lo cual indica que todos los aspectos técnicos, que incluía el convenio, por supuesto la obligación de verificar las características técnicas, especificaciones y correcta entrega de la obra (relato fiscal sobre el cual gira la investigación), pues a eso se contrae el "acompañamiento técnico" señalado en el propio convenio; obligación que por obvias razones escapaba a mi órbita de competencia funcional y contractual; sin embargo, desconociendo la prueba, a contralegem y en forma sorpresiva, es a mí a quien la Contraloría endilga esa obligación y los supuestos daños que se dice han afectado el erario público.

Sin mayores ni juiciosas discusiones se determina entonces, pues natural fluye, que el presente proceso de Responsabilidad fiscal se ha encausado indebidamente, pues no soy yo el llamado a responder en este juicio por los presuntos daños.

La base de imputación la constituye la ejecución del convenio 20202751, la cual de manera precisa se establece en los informes de ejecución y los informes periciales y de visitas a la obra, de la misma forma del documento del convenio se establece que su supervisión será realizada por la Secretaría de Infraestructura y no por el suscrito y, siendo que el incumplimiento en la ejecución o indebida ejecución constituye la base del reproche fiscal causa y motivo de la investigación, palmariamente resulta la inexistencia de responsabilidad, pues quien tiene el deber de satisfacer el derecho, en comienzo, es el Secretario de Infraestructura, lo que ineludiblemente conlleva a la conclusión, de que el pretendido daño no obedece a una actuación dolosa ni culposa del suscrito, ante lo cual se deriva la inexistencia de nexo causal entre el supuesto daño y este servidor. Al respecto el profesor ARTURO ALESSANDRI RODRIGUEZ señala:

"hay relación de causalidad cuando el hecho o la omisión dolosa o culpable es la causa directa y necesaria del daño, cuando sin él este no se hubiera producido"

Para el caso, no existe conducta dolosa o culposa que se me pueda endilgar, elemento necesario y sin el cual no puede configurarse la responsabilidad fiscal, pues nótese que el supuesto daño material no se me puede atribuir ni por acción ni por omisión.

En tal virtud, faltando dos de los elementos confluentes necesarios previstos en el artículo 5 de la Ley 610 de 2000 para estructurar la responsabilidad fiscal, esto es, una conducta dolosa o culposa en cabeza del suscrito y la relación de causalidad, se desconfigura por completo la adecuación típica del relato fiscal que injustamente y en clara violación del principio de legalidad se me endilga.

Aunque lo anterior es más que suficiente para proveer conforme ordena el artículo 16 de la ley 610 de 2000 disponiendo el cierre y archivo del asunto, coadyuva proceder en tal sentido el hecho de que conforme señala la precitada ley, los daños al erario por los que deben responder los servidores públicos con su acción u omisión deben ser cometidos en forma dolosa o culposa, agregando además que le sean imputables, presupuesto que brilla por su ausencia en el sub iudice.

La Jurisprudencia ha señalado que esa conducta ha de ser de tal magnitud que, teniendo en cuenta las circunstancias en que debió actuarse sea considerada como anormalmente deficiente, hecho que está lejos de ocurrir en el presente caso, pues no se ha establecido de ello nada se dice en el auto que apertura investigación fiscal cuál es el alcance de la obligación legal dolosa o culposamente omitida o inadecuadamente cumplida. No se ha precisado en qué forma debí haber ejercido la gestión de mis funciones y del convenio para evitar que las labores de replanteo general, pañete exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm, reflectores iluminación cancha de fútbol tipo led, cerramiento de protección e impacto elevado, control general en la ejecución, etc., sean responsabilidad de la dirección de contratación y más aún del suscrito cuando ni siquiera era funcionario de la Alcaldía del municipio de Pasto cuando se ejecutó el convenio.

Por ello, debo iterar qué pruebas trascendentales para el esclarecimiento de los hechos (elemento subjetivo), ya obran en el plenario. Veamos:

- Convenio 20202754.

- Estudio previo mediante el cual la Contraloría debe analizar el alcance del principio de planeación desplegado por la Secretaría de infraestructura y su causalidad en los resultados que se esperaban del convenio, habiendo incurrido en de carácter técnico o y de ejecución semejantes a los cometidos.
- Presupuesto de obra de octubre de 2020 y APU (suscrito por la secretaria de infraestructura).
- Acta de inicio del convenio de fecha 1 de diciembre de 2020.
- Informe de supervisión No. 1 de diciembre de 2020 (fecha para la cual el suscrito ya no se encontraba vinculado a la Alcaldía).
- Acta de amortización del anticipo, fecha 19 de diciembre de 2020 (fecha para la cual el suscrito ya no se encontraba vinculado a la Alcaldía).
- Acta final del convenio, fecha 31 de diciembre de 2020. (fecha para la cual el suscrito ya no se encontraba vinculado a la Alcaldía).
- Cuadro anexo al acta final de convenio en el que se detallan todos los items ejecutados (Datos presupuestales e información de carácter técnico).
- Acta de adición valor activo fijo No. 2020000017 de 31 de diciembre de 2020 (fecha para la cual el suscrito ya no se encontraba vinculado a la Alcaldía).
- Matriz de análisis de precios unitario APU de la Secretaría de Infraestructura Municipal (documento netamente técnico mediante el cual se establece una condición importante del presente proceso).
- Oficio radicado 2021EE0073519 DE 10 DE MAYO DE 2021, con el que se allega informe técnico rendido por el ingeniero civil de apoyo, Jonathan David Ahumada Caicedo, Profesional Universitario Grupo de Vigilancia Fiscal. Mediante el cual se establece el presunto daño.
- Acta de visita especial realizada al sitio de ejecución de las obras el 4 de mayo de 2021 por el profesional ingeniero civil de apoyo, Jonathan David Ahumada Caicedo, Profesional Universitario Grupo de Vigilancia Fiscal. Mediante el cual se establece el presunto daño.
- Hoja de vida del suscrito Rhonny Halstong Miranda Martínez. El objeto es demostrar cuál es el campo de formación académica, experiencia laboral, idoneidad y actividades del suscrito.

OBJETO DE LAS PRUEBAS

Evidenciar la ausencia de vigilancia y control en la supervisión contractual e improvisación con que actuaron, en fase de ejecución contractual, entre otros, la funcionaria encargada de la supervisión y quién ordenó la adición y el pago de la obra.

PRUEBAS APORTADAS

Constancia laboral en la cual se describen la funciones que desempeñaba el suscrito como director del DACP y las fechas en las cuales fungió como tal.

OBJETO. Demostrar cuales fueron las funciones, las fechas de competencia, el campo de formación académica, idoneidad y actividades


Señora Gerente, para efectos de su decisión, es menester tener en cuenta que, para imputarme responsabilidad fiscal, es preciso combinar unas circunstancias previstas en el marco legal, fundamentalmente una acción o una omisión donde yo participe activamente; un daño, como consecuencia de lo anterior, y, un nexo causal entre el hecho, la omisión y el daño; lo que en el sub judice no se configura, ni mucho menos se prueba.

Por tanto, en virtud de encontrar la verdad verdadera, se constituye en un imperativo jurídico escindir la solidaridad respecto de una eventual declaración de responsabilidad fiscal que promueve la Contraloría Departamental en mi contra, puesto que de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, ésta solamente se atribuirá a quien efectivamente haya generado el presunto daño al patrimonio público, situación frente a la cual, con las pruebas aducidas, conducirá a concluir que no me asiste obligación legal de compensar con mi peculio un daño que no produjo por acción ni omisión, máxime considerando las eximentes de responsabilidad que ya se han narrado y evidenciado.

Valgan las anteriores glosas para solicitar de la Gerencia Departamental Colegiada de Nariño de la Contraloría Departamental, que en aplicación de los artículos 16 y 47 de la Ley 610 de 2000, por ser justo y conforme a derecho se proceda al cierre y archivo del Expediente **PRF-80522-2021-39273**. Subsidiariamente ruego se de aplicación a los artículos 54 de la Ley 610 de 2000 y 119 de la Ley 1474 de 2011 profiriendo fallo sin responsabilidad fiscal del suscrito hecho que, bajo la buena fe cualificada o buena fe exenta de toda culpa se corrobora ampliamente.

En estos términos dejo presentada mi versión libre y espontánea.

Atentamente,



RHONNY HALSTONG MIRANDA MARTÍNEZ
C.C. No. 12748447 de Pasto
Versionado